

Concepción, lunes treinta de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Se reproduce la sentencia definitiva en alzada, con las siguientes modificaciones:

a) En su considerando noveno, en el período escrito en paréntesis, se sustituyen las iniciales “A.V.”, por la cita “Vidal Olivares, A.”;

b) En su fundamento décimo, se sustituye la locución “actuaciones”, por la expresión “alegaciones”;

c) En su fundamento décimo cuarto (sic), se cambia la palabra “marras”, por “autos”;

d) En su motivo décimo sexto (sic), primer párrafo, se reemplaza el vocablo “desgaje”, por “orden”, y en este mismo párrafo, en el período escrito en el signo ortográfico de paréntesis, la primera vez, se sustituye el apellido “Tapia”, por la cita “Tapia Rodríguez, M.”, y en el segundo período, también en paréntesis, se reemplazan las iniciales “M.T.R.”, por la misma cita “Tapia Rodríguez, M.”; y después de la expresión “Chile”, se intercala un signo de interrogación (?) como cierre de la oración;

e) En su raciocinio décimo séptimo (sic), primer párrafo, se cambia la frase “de marras”, por los vocablos “en análisis”, y se eliminan íntegramente sus párrafos tercero y cuarto (correspondientes a los párrafos penúltimo y último);

f) En su motivo décimo octavo (sic), se troca la locución “tratan”, por “trata”;

g) En su considerando décimo noveno (sic), tercer párrafo, se sustituye la frase “sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético”, por el período “tenga una razonable certeza”;

h) Se eliminan íntegramente sus motivos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo;



i) Se elimina, asimismo, el párrafo segundo de su considerando vigésimo tercero; y

j) En su raciocinio vigésimo cuarto, se eliminan íntegramente sus literales c) y d).

Y TENIENDO EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que la parte del demandante -don Fernando Enrique Anfossi Agurto-, apeló de la sentencia definitiva de primera instancia de 17 de abril de 2020, mediante la cual se resolvió literalmente lo siguiente:

I.- Que, SE RECHAZA la demanda deducida a folio 1 por don FERNANDO ENRIQUE ANFOSSI AGURTO en contra de BANCO CHILE, en cuanto al alzamiento de la hipoteca constituida sobre el inmueble de su propiedad ya singularizado, de acuerdo a lo anotado en el considerando vigésimo tercero.

II.- Que, SE RECHAZA, en todo lo demás, la demanda de indemnización de perjuicios deducida a folio 1 por don FERNANDO ENRIQUE ANFOSSI AGURTO en contra de BANCO CHILE.

III.- Que, en cuanto las alegaciones de la demandada, vertidas en su contestación y de acuerdo a lo razonado en el motivo vigésimo cuarto, en lo que se refiere

a) A que no son efectivos los hechos indicados en la demanda, se rechaza, de acuerdo a lo consignado en el motivo décimo cuarto.

b) A la improcedencia de la demanda por falta de indicación del estatuto jurídico en que se apoya la demanda indemnizatoria, se desestima, en razón de lo señalado en el motivo noveno.

c) A la inexistencia de los perjuicios alegados en la demanda, se acoge, por las razones entregadas en los motivos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno.

d) A la falta de relación de causalidad entre los hechos imputados y los perjuicios indicados en la demanda, no se emite



pronunciamiento, en razón del motivo consignado en el considerando vigésimo.

IV.- Que, no se impondrán costas a la parte demandante, por estimar el Tribunal que ha tenido motivo plausible para litigar.”(sic).

SEGUNDO: Que el recurrente adujo, en resumen, los siguientes agravios que se le habrían ocasionado con motivo del fallo apelado:

1) Porque dicha sentencia rechazó la demanda de autos, estableciendo que si bien aparece acreditado el incumplimiento contractual de la demandada por la demora en el alzamiento de las garantías hipotecarias que impidieron al demandante ejecutar los negocios jurídicos sobre el terreno hipotecado -consistentes en la venta de un bosque a la empresa MASISA S.A.-, no puede darse por establecido el efectivo monto de la venta del referido predio y que, por lo mismo, no podría valorarse la chance u oportunidad perdida a fin de establecer un monto indemnizatorio por este rubro.

Criticando esta conclusión, argumenta el impugnante que para la cuantificación del daño lo que debe considerarse es el carácter aleatorio de la chance y, citando una sentencia de la Corte de Casación francesa, afirma que “la reparación de la privación de una decisión condenatoria debe ser cuantificada de acuerdo a la pérdida efectiva de la chance que de ello resulta.”. Entonces, prosigue, lo que se busca resarcir no son las ganancias que hubiera obtenido el agraviado de no haberse verificado el evento dañoso, pues se trata de un concepto incierto y por demás aleatorio, ni tampoco se pretende indemnizar la probabilidad de obtener dichas ganancias, como hubiera sucedido si verdaderamente existiese un lucro cesante que reclamar, sino que lo que se busca reparar es la pérdida de oportunidad que tuvo el perjudicado de mantenerse en una situación que seguramente le hubiese otorgado la posibilidad de obtener beneficios. En consecuencia, dice, para esto se hacía preciso evaluar el valor económico que hubiese tenido dicha oportunidad a efectos de asignarle un valor discrecional



por concepto de reparación del agraviado. La indemnización, arguye, nunca podrá ser igual al monto que estaba sometido al alea propio de la chance, sino conforme a la pérdida efectiva de la oportunidad de intervenir en ella, la misma que deberá ser apreciada y juzgada por el órgano jurisdiccional correspondiente, de acuerdo con las calidades del sujeto frustrado. Así, sigue, el tribunal debe tener en cuenta el elemento del factor de atribución, a efectos de determinar si el daño se produjo por culpa leve, culpa inexcusable o dolo, y este criterio debe orientar al órgano jurisdiccional en los casos de responsabilidad contractual, a fin de determinar si el agente dañoso debe responder por las oportunidades frustradas que podían preverse al tiempo en que la obligación fue contraída, en los casos de culpa leve, o si el resarcimiento deberá extenderse inclusive a las oportunidades frustradas cuya generación era imprevisible, para los casos de dolo o culpa inexcusable.

Consecuencialmente, arguye, el objeto de la prueba en materia de pérdida de chances no es el monto de lo que la víctima hubiese podido ganar de no haber intervenido el incumplimiento del co-contratante, sino que debe probarse la existencia de la posibilidad de poder haber obtenido una ventaja económica, razón por la cual el fallo recurrido yerra al establecer que se debía haber acreditado en forma fehaciente el *quantum* de ganancia que la víctima esperaba obtener con la concreción del negocio para negar la indemnización solicitada, ya que la pérdida de la chance es por sí un daño autónomo.

Prosigue indicando que si bien el contenido económico del negocio frustrado tiene interés para determinar el monto del perjuicio, no es el factor más importante para cuantificar el monto indemnizatorio por la oportunidad frustrada, puesto que si fuese absolutamente necesario para fijar la indemnización el establecimiento exacto del monto de la ventaja perdida, no se trataría de la indemnización de la chance, sino de la indemnización del lucro cesante;



2) Porque la sentencia reprochada razona que no existirían antecedentes para determinar el *quantum* de ganancia que habría logrado el actor de concretarse el negocio, en circunstancias que sí los hay para los efectos de determinar aproximadamente la utilidad que la concreción de la venta de bosque le habría reportado al demandante, y ello se desprende del correo electrónico enviado el 18 de febrero de 2019, por el Gerente de Abastecimiento Forestal de Masisa al demandante, donde la empresa interesada en comprar el vuelo de bosque perteneciente a este último, fijó como precio del negocio la suma de \$ 121.472.000.- más IVA, y este antecedente constituye la oferta que dicha empresa efectuó al actor para adquirir el bosque en cuestión, por lo cual necesariamente debe estimarse que los errores cometidos en el texto de la demanda acerca de la cuantía del negocio, son salvables por este antecedente probatorio que constituye el centro y contenido económico del negocio frustrado por el incumplimiento de la demandada, y

3) Porque la sentencia recurrida le resta importancia al hecho de que en el caso de autos se trataba de una hipótesis de caducidad de la hipoteca, por lo que procedía que la demandada certificase que la hipoteca en cuestión había caducado *ipso jure* y proceder a su cancelación inmediata, y no proceder a su alzamiento, circunstancia que agrava la responsabilidad contractual de la demandada. En este sentido, expresa, la institución bancaria demandada no podía menos que saber que su derecho hipotecario sólo tenía vigencia hasta el año 2006, extinguiéndose *ipso jure* al cumplimiento de los diez años desde la suscripción de la cláusula de garantía general hipotecaria, máxime si dicha hipoteca jamás garantizó crédito alguno para con el banco demandado. Luego, al fallar la condición que justificaba la celebración e inscripción de una hipoteca para garantizar obligaciones futuras, dentro del plazo de diez años de caducidad de toda condición, el único deudor u obligado del contrato de garantía general hipotecaria es la entidad financiera a cuyo favor se encontraba constituida la cláusula



general, y su obligación, en atención a la buena fe contractual y al principio de proscripción del enriquecimiento injusto, era solicitar, en un término prudencial, el alzamiento y cancelación de la inscripción hipotecaria, ya que la existencia de la hipoteca a su favor constituye un enriquecimiento ilícito, por estar premunida la institución financiera de una garantía injustificada, sin causa, sobre el inmueble del constituyente.

En base a ello, anota, debe estimarse que el Banco demandado debe responder de la culpa levísima, dado que en estas materias es exigible a la entidad a cuyo favor se encontraba vigente una hipoteca caducada, que solo reportaba utilidad a la institución financiera, desbordándose en el caso *sub lite* la finalidad de la cláusula general hipotecaria, y, por ende, debe responder de la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, presumiéndose su incumplimiento culpable.

Por último, en su recurso solicitó concretamente la revocación de la aludida sentencia, declarándose que se hace lugar a la demanda interpuesta, en todas sus partes, en los términos solicitados o en la forma que esta Corte lo decida, y se condene a la demandada al pago de la suma de \$ 121.472.000, por concepto de indemnización de perjuicios por pérdida de la oportunidad de haber efectuado el contrato de compraventa del bosque con la empresa MASISA S.A., lo que involucra la pérdida ostensible de una utilidad acreditada, o la suma indemnizatoria que se determine; con costas.

TERCERO: Que lo primero que cabe dejar asentado es que la competencia específica otorgada a este tribunal revisor dice exclusiva relación con la negativa del tribunal de primer grado de indemnizar la pérdida de la oportunidad de haberse concretado el contrato de compraventa de un bosque –al vuelo- entre el actor, como vendedor, y la empresa MASISA S.A., como compradora, y ello como



consecuencia del incumplimiento obligacional que se le imputa al Banco demandado.

Luego, cabe dejar de lado todo lo concerniente a las demás pretensiones pecuniarias –y por los rubros en cada caso indicados– contenidas en la demanda de autos.

CUARTO: Que, asimismo, ha de dejarse desde luego asentado que en el fallo en alzada se dio por establecido el vínculo obligacional habido entre las partes de este juicio (considerando duodécimo de la sentencia que se ha dado por reproducida con modificaciones), como análogamente el incumplimiento contractual imputable a la demandada (motivo décimo cuarto (sic) de la misma).

Y estos extremos del citado fallo, cabe precisar, no fueron cuestionados por el Banco demandado, por lo que ciertamente vienen en constituirse en factores de gran relevancia para los efectos de lo que más adelante se pasará a decir.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo que se acaba de anotar, ha de precisarse que de las probanzas incorporadas al juicio y enunciadas por el juez de primera instancia en el motivo quinto del fallo reprochado, y que analizó en los considerandos duodécimo a décimo cuarto (sic), y sumado ello a los dichos de los testigos que fueron debidamente sintetizados en el fundamento sexto de la misma sentencia, aparecen configuradas bases de presunción judicial, a partir de los cuales es posible elaborar, mediante un procedimiento lógico de inferencia, una presunción judicial con caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convencimiento –según lo autoriza el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil– sobre la existencia del vínculo contractual que ligó a las partes del pleito (hipoteca con fines generales, y unida ella a una prohibición de gravar y enajenar, sobre un predio rústico de propiedad del demandante), e, igualmente, acerca del incumplimiento obligacional imputado en la demanda, consistente en la demora injustificada del Banco de Chile en proceder a alzar dichas garantías; y en todo ello compartiendo esta Corte el *factum*



asentado en el fallo impugnado en los aludos raciocinios duodécimo a décimo cuarto (sic).

SEXTO: Que, ahora bien, y en lo concerniente a la pérdida de la oportunidad o de la chance cuya indemnización se postula en la demanda, debe indicarse que, tal como se cita en la sentencia materia de revisión (considerando décimo sexto (sic)), la doctrina nacional – entre otros los autores ahí destacados (Tapia Rodríguez, Ríos Erazo y Silva Goñi)- ha ido precisando en estos últimos años el concepto de dicha situación jurídica (concepto suficientemente reseñado en el considerando recién aludido), pudiendo también citarse en un tratamiento y conceptualización más o menos análogo, al profesor Rodrigo Barría Díaz (“La pérdida de una oportunidad...”, Revista de Derecho N° 245, Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, págs.. 235-269); Claudia Mejías Alonzo (“La aplicación de la pérdida de una chance...”, en “Temas Actuales de Derecho Patrimonial”, Ed. Thomson Reuters, págs. 117 y siguientes), y Renzo Munita Marambio (“La pérdida de una chance...”, Revista Actualidad Jurídica N° 28, Universidad del Desarrollo, págs. 395 y siguientes).

En estos mismo trabajos, y en similar sentido (con unas y otras diferencias, mas no en lo esencial), se citan publicaciones de los autores extranjeros Medina Olcoz, Luna Yerga, Berrocal Lanzarot, Trigo Represas y Suarez Llanos, como también a diversos profesores de habla francesa e italiana, pudiendo agregarse a ellos a los autores argentinos Peirano y Zannoni.

Y en esta misma sintonía, en materia jurisprudencial pueden citarse, entre otras, las sentencias de la Excma. Corte Suprema roles N°s 4089-2019, 17.045-2019.-

En resumen, de una u otro modo, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha venido coincidiendo en el concepto de la pérdida de oportunidad o chance que, como se dijo, latamente se expuso en el raciocinio décimo sexto (sic) del fallo impugnado que en esta parte se ha dado por reproducido.



SÉPTIMO: Que, de esta forma, de las opiniones doctrinales y de lo que se ha ido jurisdiccionalmente determinando, puede añadirse, en términos generales y a modo de síntesis, que la referida situación jurídica (pérdida de la oportunidad) deviene como un menoscabo a todo interés lícito de un sujeto, a consecuencia del cual sufre la privación de un bien que procura a través de su actuar, trasuntándose así la chance en la posibilidad de un beneficio probable futuro.

Consecuencialmente, la indemnización por pérdida de la oportunidad o chance no debe ser identificada con la utilidad propiamente dicha dejada de percibir, sino que lo resarcible viene a ser la chance misma, sin que pueda ser equiparada con el eventual beneficio perdido.

El resarcimiento, entonces, ha de circunscribirse a la frustración de la posibilidad de lograr consolidar un beneficio o ventaja por parte del sujeto, posibilidad u oportunidad que ha de ser verificable, cierta y, según se dijo, frustrada, y todo esto, como es lógico, vinculado con el valor que le sea asignada a la expectativa que se ha creado.

OCTAVO: Que, acorde a lo expresado, la pérdida de una chance se trasunta, por lo regular, en una especie o categoría particular de daño emergente actual, dado que no se debe confundir con el beneficio esperado y futuro, ni tampoco asimilarlo a una especial categorización de lucro cesante.

Para estos sentenciadores, el perseguido (tal como fue planteado en la demanda y se corroboró con los términos de la apelación deducida) se trata de un daño autónomo, razón por la cual no procede abordarlo aquí como un mero factor de morigeración del vínculo causal entre la actuar del agente y el daño final o directo ocasionado.

NOVENO: Que en el precitado entendido, no está demás precisar que tratándose el daño postulado en el proceso de uno de carácter emergente y actual, éste, como tradicionalmente se enseña, debe ser “cierto” para efectos de ser susceptible de ser indemnizado, empero tal “certeza”, cabe desde ya decirlo, no puede ser exigida en



términos absolutos, en la medida que un juicio de certeza absoluta -incólume y tajante- humanamente, creemos, no puede existir. Y sobre esto, huelgan otros comentarios.

Por consiguiente, de lo que se trata aquí al hablar de “certeza del daño”, no es de otra cosa que discurrir en base a una “razonable certeza”, porque solamente es el juicio de probabilidades –y específicamente de mayores probabilidades- el que va a arrojar la certidumbre necesaria, suficiente e idónea para estar en presencia de un daño indemnizable.

DÉCIMO: Que, ahora, a juicio de estos sentenciadores en la especie es posible arribar a esa razonable certeza acerca de la existencia del daño demandado, y ello en base a la prueba documental y testimonial, ya referida, antecedentes que, al igual como más arriba se reflexionó, constituyen aquí indicios o bases de presunción, de los cuales, y mediante el mismo procedimiento lógico anotado, puede construirse una presunción con mérito probatorio suficiente para acreditar tal extremo, vale decir, el menoscabo patrimonial producido al actor con motivo de la pérdida de la oportunidad de vender un bosque al vuelo, plantado en su predio “Roble Huacho” a la empresa MASISA S.A., en la suma de \$ 121.472.000, más IVA, y ello como consecuencia del incumplimiento obligacional imputable al Banco demandado.

UNDÉCIMO: Que los mismos antecedentes de convicción que se vienen señalando, conducen razonablemente a concluir que el incumplimiento de la demandada, o sea, la demora en el alzamiento de las garantías –situación debidamente explicada en el último párrafo del motivo décimo cuarto (sic) del fallo en alzada y que esta Corte ha hecho suya-, fue al factor adecuado y apto para provocar la pérdida de la oportunidad respecto de la venta del bosque perteneciente al actor, dado que de no haber mediado dicha demora imputable al Banco de Chile, el curso normal de los acontecimientos habría desembocado razonablemente en la materialización de ese negocio jurídico.



Entonces, en el caso en examen aparece demostrado el necesario vínculo de causalidad entre el evento dañoso (la pérdida de la oportunidad o de la chance de la venta) y el incumplimiento obligacional (la demora en el alzamiento de las garantías) de parte de la institución bancaria demandada.

DUODÉCIMO: Que, asentado lo anterior, y entendiendo que una cosa es la existencia del daño y otra distinta su cuantificación, debe señalarse en cuanto a esto último que el monto a indemnizar por la pérdida de la chance del demandante de autos, y conforme ya se adelantó, no puede identificarse con la pérdida del beneficio mismo que se esperaba, razón por la cual el *quantum*, como es de toda obviedad, ha de ser fijado en una cantidad inferior al monto indemnizatorio respecto de las ganancias que se habrían obtenido de no haberse frustrado el negocio que se esperaba concretar. Recordemos que lo que se indemniza aquí es precisamente el valor de la oportunidad pérdida.

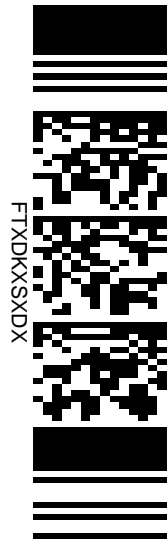
Para los efectos precitados, sin embargo, debe sí ser considerada, empero como un factor más, la ganancia esperada –en este caso los \$ 121.472.000, ya aludidos-, empero unido a ello, estima esta Corte que también debe considerarse el grado de probabilidad que tenía el actor para haber finalizado con la negociación que se frustró a causa del hecho dañoso, lo avanzado de la misma, y, principalmente, “la comparación entre las probabilidades de aprovechar una chance y las probabilidades de la misma de no presentarse” (Osterling Parodi, F. y Rebaza González, A., en “Boletín Legal Diario” –Perú-, 3 de noviembre de 2004). Así, el *quantum* a fijar ha de ser directamente proporcional con el grado de probabilidad de la concreción de la oportunidad.

Pero no sólo lo anterior, sino que también debe ser considerado para los efectos de la cuantificación, el factor de atribución del incumplimiento, el que en este caso, y partiendo de la base que se presume culpable (artículo 1547, inciso tercero, del Código Civil), se



manifiesta efectivamente en la culpa levísima que aduce el recurrente, dado que la mantención de la hipoteca sobre el predio del actor desde el año 1996 hasta el año 2019, sin que se encontrare garantizando ninguna negociación celebrada (hecho no discutido por la demandada), conduce a estimar la concurrencia de tal gradación en la culpa del deudor. En efecto, y teniendo en cuenta que ya es tema generalmente aceptado que la hipoteca que no caucione obligaciones específicas y determinadas no puede seguir subsistiendo por más de diez años -en virtud del efecto de la caducidad-, afirmación que también puede hacerse extensiva a la existencia de la condición suspensiva indeterminada a la que se hallaba sujeta, y todo ello en base a que dicho plazo constituye, sin duda, el lapso general máximo de prescripción del Código Civil, resulta que, a lo menos desde el año 2006 en adelante, bajo ningún respecto podía el Banco mantener vigente la mencionada caución real gravando el bien raíz del demandante. Por lo tanto, y en estas peculiares circunstancias, cabe atribuirle dicho grado de culpa al demandado.

No obstante, y relativamente a esto último, no escapa a este tribunal que la aplicación del principio de la buena fe (artículo 1546 del Código Civil), también le imponía en este caso al demandante un deber de tomar medidas -digamos más bien razonables medidas- tendientes a reducir la producción de un perjuicio por el incumplimiento (o por el riesgo de incumplimiento) de su contraparte. En otras palabras, y de acuerdo a lo que actualmente se enseña a partir de instituciones jurídicas de derecho comparado, pero que en el ámbito doméstico pueden sustentarse en el principio de la buena fe o de moralidad (de transversal aplicación en nuestro derecho), cabe también considerar en lo relativo a la fijación de la cuantía indemnizatoria, el factor que se ha dado en denominar de la “mitigación de daños” (o de moderación de los mismos), el que, como en nuestro país encontraría base en el señalado principio, estimamos



que puede ser aplicado de oficio en el caso *sub lite* y sin necesidad de petición de parte.

DECIMOTERCERO: Que, así las cosas, y teniendo en cuenta fundamentalmente los factores que recién se han expuesto, en unión con los hechos que se han dado por establecidos en la situación de autos, estos juzgadores consideran, mediante la utilización de un razonamiento lógico por defecto, que a partir del precitado valor de \$ 121.472.000, el grado de probabilidad que habría tenido el demandante para la concreción de la venta habría sido de un veinticinco por ciento de no haberse frustrado su oportunidad con motivo del incumplimiento de la demandada, lo que arroja cuantitativamente una cantidad de \$ 30.368.000.-

Sin embargo, y en base al factor mitigante más arriba explicitado –recordemos que van trece años desde el 2006 al 2019, y se trata de un prolongado lapso donde el actor nada hizo en pos del alzamiento que recién reactivó el pasado año 2019-, se procederá a rebajar el último monto apuntado en un cincuenta por ciento –y esto en base a un criterio de igualdad y proporcionalidad-, de lo que resulta que la cifra a que se accederá en carácter de cuantificación del daño indemnizable por pérdida de la oportunidad del demandante de vender su bosque, se fija en \$15.184.000, suma que la demandada habrá de solucionar con los ajustes económicos que se dirán en lo dispositivo de esta sentencia.

DECIMOCUARTO: Que sobre lo anterior no huelga mencionar que en nuestra legislación, y a diferencia de legislaciones comparadas de más reciente elaboración, no existe una norma que autorice al órgano jurisdiccional, y específicamente en materia de daños patrimoniales, para realizar una apreciación prudencial del *quantum* indemnizatorio en el evento de no contarse con parámetros objetivos para tales efectos.

Luego, en la materia en análisis no cabe acudir a ninguna “prudencia” ni “discrecionalidad”, por lo que sólo a partir de los



factores y parámetros a que más arriba se ha hecho referencia, esta Corte ha arribado a la cuantificación del daño en el monto aludido.

DECIMOQUINTO: Que ha de tenerse en cuenta sobre lo que se viene discutiendo, que las cantidades pretendidas en la demanda de autos por concepto de indemnización de la pérdida de la oportunidad, son ostensiblemente mayores a la cifra dineraria que se ha llegado a determinar, de modo que lo razonado y resuelto no transgrede la exigencia legal relativa a la necesaria congruencia procesal que debe ser observada.

DECIMOSEXTO: Que, como corolario, la apelación de la parte demandante habrá de prosperar del modo que se pasará a decir, y se resolverá en consecuencia.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **SE REVOCA**, con costas del recurso, la sentencia definitiva apelada de diecisiete de abril de dos mil veinte, dictada por el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, en causa rol C-1003-2019, del ingreso de dicho tribunal, mediante la cual se desestimó la demanda de autos en lo referente a la indemnización de perjuicios solicitada por pérdida de oportunidad, y, **en su lugar**, se decide que **se hace lugar** en ese extremo a la referida demanda, sólo en cuanto se condena al Banco de Chile a pagar al demandante, la suma de quince millones ciento ochenta y cuatro mil pesos (\$15.184.000), por concepto de indemnización de perjuicios por el aludido ítem, y sin costas por no haber sido totalmente vencido.

Se confirma en lo demás la referida sentencia.

La suma ordenada pagar, habrá de solucionarse debidamente reajustada, según la variación positiva que experimente el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), entre la fecha de esta sentencia y la data en que el pago efectivo se produzca, y sin intereses por no haber sido solicitados.



Regístrese y devuélvase oportunamente.

Redacción del ministro titular don César Gerardo Panés
Ramírez.

Para la dictación de este fallo, según consta en autos, se hizo uso de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 1.642-2020 – Civil.-



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Cesar Gerardo Panes R., Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, treinta de agosto de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

